



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

RADICADO: 11001-33-35-026-2020-00036-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ZULLY MARICELA LADINO ROA
DEMANDADO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Estando el proceso al Despacho para señalar la fecha y hora para la realización de la audiencia inicial, se observa que en su contestación la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por proposición jurídica incompleta, que en principio, a la luz del numeral 6° del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y del artículo 12 del Decreto 806 de 2020¹, debe ser objeto de pronunciamiento en esta etapa procesal.

Ahora bien, en el artículo 12 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020², determinó que en materia Contencioso Administrativa, de las excepciones presentadas se correrá traslado por 3 días, término dentro del cual la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

La misma norma señala que las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del C.G.P., y que cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 *ibídem*, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará y decidirá sobre los medios exceptivos de carácter previo.

En armonía con lo anterior, dentro del presente asunto la parte actora solicita declarar la nulidad del acto administrativo distinguido con la nomenclatura 2019017245 del 30 de agosto de 2019, por medio del cual el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, negó la solicitud elevada por la actora el 6 de agosto de 2019, con el objeto de que se le cancelara **(i)** el sueldo básico, los gastos de representación, la prima especial de servicios y la bonificación judicial correspondiente al 1° de septiembre de 2016, y **(ii)** la bonificación de actividad judicial causada por los servicios prestados entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2016.

¹ Vigente para el momento en que se surtió esta actuación.

² Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

En respaldo de estas solicitudes, la parte actora aduce que la pasiva reconoció los haberes causados por concepto de sueldo básico, gastos de representación, prima especial de servicios y bonificación judicial a partir del 2 de septiembre de 2016, es decir que para este periodo solo canceló emolumentos por 29 días, a pesar de haber laborado un total de 30 días pues su posesión data del 1° de septiembre de 2016, lo que a su vez le implicó no poder causar la bonificación de actividad judicial de manera proporcional como lo dispone el artículo 7° del Decreto 3131 de 2005, modificado por el artículo 3° del Decreto 3382 de 2005.

Al respecto, la pasiva aduce que la demanda adolece de ineptitud sustantiva por proposición jurídica incompleta, dado que además de solicitar la nulidad del acto administrativo 2019017245 del 30 de agosto de 2019, era necesario invocar la nulidad del Acta de Posesión del 1° de septiembre de 2016, que determinó los efectos fiscales de la vinculación al empleo a partir del 2 de septiembre siguiente, es decir que esta se trata de un acto administrativo definitivo pasible de control de legalidad en este medio de control.

De acuerdo con esta reseña, el Despacho considera que el medio exceptivo propuesto por la demandada, no está llamado a salir avante, teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica del acto cuya censura la pasiva echa de menos en la demanda, no permite que el mismo pueda demandarse ante esta jurisdicción.

Según se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 43, 74 y 163 de la Ley 1437 de 2011, son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los actos administrativos que tienen el carácter de definitivos, es decir, aquellos que deciden el fondo del asunto y además cumplen con los criterios reconocidos por la doctrina para su existencia, esto es, que exteriorizan la manifestación de voluntad unilateral de la administración para crear, modificar o extinguir una situación jurídica, decidiendo directa o indirectamente las actuaciones administrativas. Dicho de otro modo, solo los actos definitivos que por sí mismos generan efectos jurídicos, son pasibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Dicho esto, es claro que a diferencia del acto que contiene el nombramiento o designación de un servidor público, los actos de posesión no constituyen actos administrativos de carácter definitivo y de contera no pueden ser sometidos a estudio de legalidad, dado que en *stricto sensu* no contienen decisiones de la administración, sino que más bien se erigen como actuaciones mediante las cuales, un servidor nominado presta juramento ante la autoridad competente respecto del compromiso de cumplir los deberes que un determinado cargo impone, como requisito previo e indispensable para ejercer las funciones derivadas de su investidura, en expresión del cumplimiento del deber señalado en el inciso segundo del artículo 122 de la Constitución Política.³

³ C.E., S. 1ª, auto de noviembre13/2019, radicación interna 11001-0328-000-2017-00009-00, M.P. Oswaldo Giraldo López, entre otros.

En gracia de discusión, eventualmente para el caso *sub judice* podría entenderse como un elemento probatorio de alguna situación alegada, empero, en momento alguno se convierte en acto demandable.

Así las cosas, el Acta del 1° de septiembre de 2016, en virtud del cual la parte demandante tomó posesión del cargo para el cual fue designada dentro de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no puede ser objeto de control de legalidad por parte de esta jurisdicción al no tratarse de un acto definitivo, luego mal podría exigírsele al extremo activo de la *litis* solicitar su nulidad, ni siquiera en el caso de que esta diligencia difiriera acertada o equivocadamente los efectos fiscales de la vinculación laboral de la accionante, en virtud de lo cual, el medio exceptivo carece de vocación de prosperidad, tal como se declarará en la sección resolutive de este proveído.

Por lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA hasta esta etapa procesal, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por proposición jurídica incompleta propuesta por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: Por no hallarse probado hasta el momento ningún medio exceptivo con carácter de previo distinto al analizado, **DECLARAR CONCLUÍDA** esta etapa procesal, sin perjuicio de la obligación que tiene el despacho de declarar cualquier otra que evidencie probada al momento de dictar sentencia.

TERCERO: En firme este proveído, el expediente habrá de ingresar al Despacho para continuar con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado Por:

ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 3ad467a4850126273af39828801f8bd0aee35fa3e70a394496d4e5f493d9ebb5

Documento generado en 16/02/2021 01:32:33 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/firmaElectronica>